

# Sociología y Política, una relación siempre problemática

Marina Subirats

Catedrática de Sociología de la UAB

Me habéis pedido que, en este veinticinco aniversario de la FES, os hable de algunos aspectos de nuestra profesión, y especialmente de las relación entre Sociología y Política, o, más precisamente, de las relaciones que se establecen entre los profesionales de la Sociología y los cargos de la Administración. Un cierto número de sociólogos —e incluso algunas sociólogas— hemos pasado por la experiencia de ocupar algún cargo electo o de responsabilidad ejecutiva; sin embargo esta experiencia ha sido poco analizada, que yo sepa, y creo que merece serlo, pues se trata de dos posiciones que deben forzosamente estar en relación, colaborar en su trabajo, y que, sin embargo, a menudo tienen dificultades para hacerlo. Intuyo que estas dificultades proceden no de las personas, sino precisamente de la diferencia de posiciones. Por ello me complace que me deis la ocasión de exponeros lo que he ido pensando sobre esta cuestión.

Pero antes de entrar en ella quisiera referirme muy brevemente a algunos aspectos de la propia profesión sociológica, cuyo perfil me parece hoy problemático en España, y quizás también fuera de ella, aunque en este momento no estoy muy al día de lo que pasa fuera. Así que voy a referirme a dos aspectos: en primer lugar, qué habría que hacer, a mi entender, para construir mejor y consolidar la profesión de sociólogo/a; en segundo lugar, cómo establecer una mejor relación con los organismos políticos y la Administración Pública, que constituyen probablemente los receptores más idóneos de los mensajes y análisis que puedan realizarse desde la Sociología. Todo ello dicho muy rápidamente y por lo tanto con exageraciones, vaguedades e imprecisiones, como es propio de una charla y de una persona que hoy está fuera de la experiencia académica y tiene escaso tiempo para explorar minuciosamente los recovecos de cada tema.

## CONSTRUIR LA PROFESIÓN SOCIOLÓGICA

Con cuarenta años de profesión a las espaldas se comienza a tener una imagen del camino recorrido, personal y colectivo. No pertenezco a la primera generación

de sociólogos españoles, pero entiendo que sí a la segunda, la que comenzó a ejercer la investigación y la docencia universitaria con cierta sistematicidad y normalidad a partir de los años setenta y que tuvo que crear, por así decir, la figura pública de la profesión. Me sentía entonces en la posición del precursor, que sabe que su tarea es la de poner las bases para que otros puedan culminar el trabajo, y siempre creí que la generación que me seguía, la de los que fueron nuestros alumnos y alumnas, iba a estar en condiciones de realizar un trabajo de un calado científico más sólido, con una metodología menos errática que aquella que nosotros habíamos heredado de las diversas escuelas de pensamiento en la que nos formamos los sociólogos españoles en los sesenta y en los setenta.

Ha pasado el tiempo y la tercera generación de sociólogos, la que puede tener hoy entre treinta y cinco y cincuenta años, ya es entre nosotros una realidad potente, mucho más amplia, numéricamente, de lo que fue la nuestra, y plenamente normalizada en lo que atañe a la presencia de la Sociología en las universidades. Sin embargo, no acabo de ver que se produzca una suficiente consolidación, si por consolidación entendemos la aparición de un campo específico cuya producción sea utilizada regularmente por la sociedad. O mejor dicho, sí existe este campo, pero lamentablemente creo que lo que en él se produce no acaba de satisfacernos en tanto que sociólogos, por varias razones.

En efecto, aquello que aparece hoy, para el conjunto de la sociedad medianamente informada, como el trabajo típico de quienes se dedican a la Sociología, es la producción de encuestas, tipo de trabajos divulgados con alta frecuencia por los medios de comunicación, y que reciben una atención minuciosa porque suelen estar relacionadas con los avances o retrocesos de los diversos partidos políticos o con situaciones o comportamientos sociales que pueden ser objeto de cierta notoriedad. Desde luego, se trata de una notable reducción de las posibilidades de la Sociología, y por ello me parece lamentable que esta haya acabado siendo la utilidad que de una manera general nos atribuye la sociedad. Ahora bien, lo peor no es que la imagen pública de los sociólogos sea la de «los que hacen encuestas», sino que hayamos dejado que estas encuestas se hagan tan mal, y, sobre todo, sean tan mal utilizadas por los medios de comunicación, de modo que acaban siendo utilizadas para cualquier finalidad excepto la de conocer mejor lo que ocurre en nuestra sociedad.

Entendámonos, no me escandaliza en absoluto el uso de encuestas, aunque ya resulta un tanto extraño que definamos los estudios por medio de uno de sus instrumentos metodológicos entre los muchos posibles. Lo que lamento es que, como profesión, no hayamos podido controlar su uso social, y que, al menos en nuestro país, este sea frecuentemente de una muy discutible corrección. Encuestas con muestras insuficientes, con preguntas mal formuladas, con ambigüedades de todo tipo, acaban siendo consideradas como «ciencia», indiscutibles, serias. A menudo leemos en grandes titulares que tal o cual partido político mejora o languidece, con todo un cortejo de especulaciones periodísticas tratando de justificar tales procesos, y todo basado en variaciones de décimas sobre muestras que, por definición,

presentan oscilaciones mucho mayores que las diferencias de resultados sobre las que tanto se especula; y ello aun sin entrar en si tales muestras fueron efectivamente respetadas, cuántos rechazos se produjeron, en qué condiciones se realizaron las preguntas y tantos otros elementos que, como todos nosotros sabemos, son fundamentales a la hora de atribuir verosimilitud a un resultado.

No estoy acusando a los sociólogos de hacer mal su trabajo; digo, simplemente, que por razones diversas —probablemente por debilidad de la propia profesión— no hemos podido controlar las condiciones en las que este trabajo se produce, ni, sobre todo, las condiciones en las que se usa. Posiblemente ya era bastante difícil, para las nuevas generaciones, encontrar algún empleo y, por consiguiente, era impensable poder exigir que el trabajo tuviera algún sentido, o fuera utilizado en forma correcta. En cualquier caso, los medios de comunicación no iban a pararse ante cuestiones metodológicas, o matices interpretativos; como me comentó una vez un eminente periodista, en el fondo, que más da, puesto que incluso si los datos que reflejan las encuestas no son ciertos, los propios medios de comunicación son creadores de realidad. Así que todo acaba saldándose con unos cuantos comentarios despreciativos cada vez que las elecciones muestran grandes diferencias con los resultados de encuestas previos, y seguimos realizándolas para conferir un cierto barniz de legitimidad a la divulgación periodística.

Bien, así están las cosas. Pero como nos encontramos en una fase de consolidación —o de posible liquidación, claro, si se acaba descubriendo que las aportaciones de los sociólogos no tiene mucho sentido— me parece que, como profesión, debiéramos preocuparnos de ello, si nos tomamos en serio nuestro trabajo y creemos que tiene algo valioso que aportar a la sociedad. Cosa que yo, desde luego, sigo creyendo.

Y es por ello que considero que las asociaciones y colegios profesionales han de tener un papel relevante y de importancia creciente. No se trata de que, en forma individual, algunos de nosotros nos lancemos a criticar el trabajo de los demás y a negar la validez de las encuestas o de las metodologías empleadas; esto no tendría ningún sentido y acabaría siendo interpretado como una típica batalla de egos excesivos. Creo que se trata más bien de una tarea que hay que asumir colectivamente, con el espíritu propio de las profesiones que tratan de garantizar la acción de sus miembros para mejorar su aportación colectiva a la sociedad. Si los sociólogos queremos mejorar nuestra aportación, debemos construir la posibilidad de un control sobre el ejercicio profesional, garantizar que aquello que se dice está sometido a un control de calidad, control que no puede sino ser ejercido por la propia profesión, única que puede juzgar de la seriedad de un trabajo. Sugiero, por tanto, —y me parece hoy ya una necesidad urgente— que los colegios profesionales, en cuanto tales, ejerzan la crítica, establezcan formas de control de calidad y sean sus garantes, sobre todo en el tema de las encuestas destinadas a los medios de comunicación. Si así se hace, alguien se quejará; puede que algún negocio —pequeño, probablemente— corra peligro, y tal vez algunos sociólogos jóvenes pierdan la ocasión de algún empleo. Pero sólo así, me parece, lograremos mejorar

la calidad real de los estudios y de las encuestas, y dar consistencia a una tarea que de otro modo acabará siendo abandonada víctima del desprestigio y la manipulación.

Este es un aspecto que quería plantear: actuemos corporativamente, por favor, no tanto para reclamar parcelas de conocimiento como exclusivas sino para reivindicar la legitimidad en el control del oficio y crear unas condiciones adecuadas para ejercerlo. Nunca sabremos, de otro modo, qué es lo que este oficio puede dar de sí. Con el peligro de seguir oscilando, como veo a menudo en la generación más joven, entre un criticismo furibundo frente a cualquier planteamiento y la aceptación del primer empleo disponible, por absurdo, irrisorio o manipulador que pueda ser.

Hay otros aspectos ligados a la construcción de la profesión que quisiera aún mencionar, aunque sea muy rápidamente: más allá del tema de las encuestas, creo que debiéramos tender a definir mejor las diversas áreas de investigación, o, por decirlo con un término conocido, a delimitar unas cuantas problemáticas centrales para la profesión y a construir instrumentos compartidos para enfrentarnos a estas problemáticas. Sé que ésta ha sido una dificultad central de la Sociología desde sus inicios, y que también en otros países se ha producido la tendencia a que cada maestrillo escribiera su librito. Es aún así a menudo, como si esta profesión exigiera que cada uno de nosotros tuviera que fabricarse sus propios conceptos, sus propias teorías, huyendo como de la peste de lo que me parece la base del trabajo científico: el construir apoyándose en lo que construyeron quienes nos precedieron, aunque ello no deba suponer, está claro, la incapacidad de replanteamiento, de ruptura epistemológica. ¿Cuántas investigaciones sociológicas han sido replicadas en nuestro país por alguien que no fuera su autor inicial? Como mucho, cabe esperar, habitualmente, en tesis e investigaciones académicas consideradas serias, una revisión inicial de la literatura sobre el tema. Pero lo que es más sorprendente —por lo menos en los campos de investigación que conozco de cerca— es que en estas revisiones raramente aparecen autores españoles, y ello incluso en los casos en que existen trabajos notables sobre los objetos de análisis elegidos. Mientras en cambio, no puede faltar la panoplia anglosajona, venga o no a cuento. ¿Inseguridad, desprecio por nuestro propio trabajo, ninguneo del colega, del compañero/a? En mi generación había dos motivos que explicaban esta manera de actuar, tan evidente: la falta de producción española en la mayoría de temas y una fascinación por el discurso norteamericano, inglés, francés, alemán en algunos casos, que correspondía realmente a la miseria intelectual de nuestro país. Pero todo esto quedó atrás y no acabo de comprender que sigamos manteniendo la nefasta tradición de menospreciarnos, de no trabajar coordinadamente, de no construir conjuntamente una disciplina que sólo puede existir y dar frutos interesantes si es una casa común, una convención común, que nos sirva para pensar e investigar, aunque por supuesto no represente ninguna cárcel, ningún límite para nadie.

Ciertamente, la sociología ha sufrido de este tipo de procesos en todas partes; su propio planteamiento la abre a los cuatro vientos y hace difícil delimitar y ce-

rrar los objetos, los campos de investigación. Es una disciplina en eterno comienzo, demasiado dependiente de los propios cambios sociales y del uso que de ella se hace desde la política; de aquí que aun hoy, doscientos años después de sus inicios más o menos formales, no sepamos todavía si se trata de una ciencia o de una materia ensayística, si estamos ante una disciplina de corte descriptivo o interpretativo, si tiene sentido tratar de buscar el hueso, la estructura, lo relativamente permanente y las leyes que rigen sus procesos evolutivos, o debemos conformarnos con ir contando la diferencia entre el ayer y el hoy, la novela de la vida, con menos amabilidad y más afán de precisión del que usan los novelistas. Si lo nuestro es fabricar relatos más o menos convincentes o buscar soluciones a los muchos problemas que generan sin cesar los cambios sociales.

A pesar de todo en el ámbito internacional algunas cosas han ido cambiando. Algunos indicadores se han ido estabilizando, a partir de los informes de desarrollo humano de Naciones Unidas o de los intentos de hallar instrumentos compartidos para definir la pobreza o de otros, de carácter sectorial, que han ido estableciendo una metodología ciertamente aún discutible, pero que tiene el mérito de ser compartida, de permitir comparaciones transnacionales o series temporales que comienzan a establecer perfiles y evoluciones menos sometidos al prejuicio, algo más objetivables, aunque sólo sea por la estabilidad del instrumento utilizado en su observación. Claro que no todo esto circula bajo la etiqueta de «sociología»; más aun, en las librerías, las estanterías que llevan este rótulo han ido estrechándose, desapareciendo a veces, para dar lugar a una dispersión de temas que van de la pobreza al feminismo, de la globalización a las religiones. No hay unidad temática ni metodológica, ni quizás hay por qué reclamarlas. Pero sí, creo, compartir determinados criterios, determinados instrumentos, que aparecen como una necesidad incluso política y que permitan, por lo menos, construir un análisis global en un mundo global.

Bien, no pretendo desde luego entrar en todo este debate, para el que tengo sólo respuestas parciales, provisionales, y más preguntas que añadir. Pero no se trata aquí de entrar en el debate de la sociedad, sino, como os decía al principio, entiendo que se trata de preguntarnos qué podríamos hacer en lo que he llamado, para entendernos, la etapa de consolidación de esta profesión en España, aún sabiendo que existen estos interrogantes, que nacieron con ella, y que probablemente la acompañarán por muchos años. En este sentido, me permito sugerir, a riesgo de irritar a la mayoría, lo que he comentado ya varias veces a mis compañeros y compañeras del ámbito de la educación: hagamos el intento de ponernos de acuerdo sobre cuáles son las cuestiones fundamentales, construyamos, colectivamente, el campo, los objetos de investigación, por usar la terminología bourdieuriana que casi todos conocemos, establezcamos ciertas especificidades y a la vez ciertas formas de relación con las disciplinas cercanas, usemos los paradigmas y conceptos hasta agotarlos, evitando cambiar continuamente de discurso, ahondemos en los temas, repliquemos las investigaciones que han resultado más fructíferas. Establezcamos instrumentos de observación periódica, mantengamos su continuidad en

el tiempo, revisemos las series, saquemos conclusiones. Analicemos las situaciones, las políticas aplicadas, sus consecuencias, y transmitamos estos planteamientos a las nuevas generaciones, las que hoy se están formando, las que nosotros estamos ayudando a formar en nuestras universidades. Y que los colegios y asociaciones profesionales, y la FES por supuesto, tengan un papel primordial en todo este proceso, que no corresponde ya únicamente, como sucedía hace treinta años, a la universidad, primer reducto de trabajo sistemático de los sociólogos en España, sino a los organismos de una profesión que cuenta con una cantidad importante de miembros y una escasa tradición, y que necesita, por tanto, instrumentos para pensar su función, sus formas de organización, de intervención en la sociedad y de defensa de sus intereses, que hoy no pasa, a mi modo de ver, por delimitar territorios, sino por demostrar que nuestras prácticas profesionales son útiles y necesarias para la colectividad.

#### DEL USO PÚBLICO DE LA SOCIOLOGÍA: LAS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

A todo esto ¿cuál puede ser la aportación de la Sociología? ¿En qué puede consistir su función social, más allá del deleite personal por el conocimiento, y en tanto que oficio reconocido y transmitido a jóvenes estudiantes? ¿Existe hoy, entre nosotros, un reconocimiento y un espacio desde los que esta profesión pueda ejercerse?

Esta última pregunta me lleva al terreno sobre el que inicialmente me habíais propuesto hablar: las relaciones entre Sociología y Administración Pública. Unas relaciones que me parecen a la vez necesarias y difíciles, por razones diversas. Habiendo estado, por azares biográficos, en ambas posiciones, la académica y la de cargo público, he podido comprobar las diferencias que presuponen cada una de ellas, sus vínculos y sus desencuentros. Y creo que, aun cayendo forzosamente en la simplificación, algo puedo decir de tales desencuentros.

Max Weber nos contó hace ya mucho tiempo, y a mi entender con notable perspicacia, la diferencia entre el punto de vista del intelectual y el del político. Cuanto más he pensado en ello y más experiencias diversas he vivido, más convencida estoy de que tiene razón en su planteamiento, por lo menos hasta cierto punto. Pero, al mismo tiempo, también creo que se trata de un planteamiento marcado por una época y un modo de actuar no forzosamente necesarios, y de hecho hoy ya envejecidos. El momento político actual exige, a mi modo de ver, un cambio, en el cual las propuestas del intelectual —y en este caso del sociólogo— que han de proceder de un trabajo profesional, paciente, contrastado, informado, orienten y enriquezcan las de quienes ejercen en el ámbito político, generalmente mucho más pragmáticas y posibilistas y por tanto carentes de una auténtica capacidad de transformación o incluso a menudo de solución de los problemas.

Atención, es demasiado fácil denigrar a los políticos y considerar que se trata de personas sin principios, dispuestas a lo que sea para perdurar en sus cargos.

Hay entre quienes ostentan cargos en la Administración —hablo de lo que conozco, Administración central, en un período, y municipal en Barcelona, en otro,— tanta gente decente, valiosa y esforzada como pueda haberla en la Universidad o en cualquier otro ámbito profesional, y el balance entre retribuciones y honores por una parte y riesgos, responsabilidades y preocupaciones por otra suele ser, para los políticos, más negativo que en muchos otros ámbitos profesionales, notoriamente la Universidad. Así que descartemos de entrada los prejuicios al uso, que no nos llevan a ninguna parte, para tratar de entender qué hay en las respectivas posiciones que las hace, hasta cierto punto, antagónicas.

En el actual reparto de funciones entre intelectuales y políticos, a los intelectuales les atribuimos el conocimiento teórico, el saber qué hay que hacer, cuáles pueden ser las soluciones a los problemas. El establecer un diagnóstico, por hacer un símil médico siempre cercano a la Sociología, y, en el mejor de los casos, el indicar la medicina, no el aplicarla, tarea que corresponde al político. Ya sé que probablemente muchos sociólogos no aceptarían siquiera la indicación del remedio como tarea propia de nuestra disciplina; para mí, esta parte es indispensable, puesto que, si hablamos de utilidad social, de nada sirve describir perfectamente a un enfermo su dolencia para después dejarle morir porque no queremos interferir en los procesos. Se morirá informado, de acuerdo, pero probablemente maldiciendo a su sabio mentor. Y, de todos modos, alguien menos remilgado acabará indicando remedios; los politólogos, por ejemplo, menos entrenados habitualmente a establecer diagnósticos en profundidad, pero más atentos a las urgencias y necesidades de la sociedad.

Esperamos, por tanto, del intelectual, claridad en el diagnóstico de las situaciones y, a ser posible, conocimiento suficiente para indicar soluciones correctas frente a los diversos problemas que se plantean. Ello, para quien debe actuar desde la Administración, es fundamental, puesto que el político no tiene tiempo ni medios para establecer personalmente el diagnóstico de las situaciones que se le plantean y para comparar las soluciones posibles, con sus efectos directos o secundarios, sus contraindicaciones, sus consecuencias. Ahora bien, existe una gran diferencia en el tipo de problemas que hay que resolver desde una y otra posición. En el caso de quien se ocupa de Sociología, entiendo que la principal norma de su trabajo es la de tratar de comprender la realidad de los vínculos sociales, de los intereses enfrentados, las causas de los enfrentamientos, la naturaleza de los motores que determinan en forma principal los movimientos de los diversos actores sociales. La lógica de lo social, por usar un término conocido, que tiene como característica el no ser visible, el estar oculta por una capa más o menos espesa de ideologías, razones hegemónicas, prejuicios y, en nuestros días, discurso divulgador que brota a borbotones desde los medios de comunicación y que tiende a suplantar al discurso científico. La tarea de levantar este espeso velo de razones superpuestas y entrecruzadas para tratar de hallar el núcleo de la dinámica social, en cada momento y frente a cada cuestión, es, indudablemente, una tarea ardua, que exige un esfuerzo a veces agotador y que difícilmente concluye, puesto que

nunca podemos estar seguros de haber reconocido todos los ingredientes, y de haber reducido el último velo, aquel que probablemente ni siquiera podemos ver porque forma parte intrínseca de nuestra manera de razonar.

Este es, sin embargo, en mi opinión, el único servicio real que la Sociología puede aportar a una sociedad desbordante de discursos y racionalizaciones que de poco sirven para resolver los problemas que ella misma genera, y que a menudo proceden de consecuencias no previstas al aplicar remedios a problemas anteriores. Por ello apreciamos en los sociólogos la claridad, la voluntad de ir al origen de las cuestiones, a la raíz: el radicalismo, en cierto modo. Radicalismo en los planteamientos, en los diagnósticos, en las líneas de acción propuestas. Los buenos sociólogos, como los buenos intelectuales en general, nos interesan porque nos proponen una lectura ordenada de las situaciones y una forma de proceder para solucionarlas: «esto funciona mal por estas razones; por tanto, para que funcionara bien, habría que aplicar tales medidas, y hacerlo en este orden». Simplifico, por supuesto, para entendernos en este texto que no pretende ir más allá de la brocha gorda.

Ahora bien, en las propuestas de la Sociología no encontramos habitualmente la referencia a un marco concreto, a la aplicación coyuntural; las propuestas son generalmente definidas en el vacío, en un ámbito intemporal y abstracto en el que teóricamente todo el mundo actúa de acuerdo a unos intereses generales. Es el famoso *ceteris paribus* de los economistas, convención necesaria para poder avanzar en una investigación, pero que suele invalidar su aplicación a la mayoría de las situaciones reales. Por usar una imagen gráfica: en el mejor de los casos, el sociólogo nos dice dónde habría que conducir la barca, nos señala un punto en el horizonte que corresponde al lugar en que los problemas estarían resueltos. Pero casi nunca nos habla de cómo conducirla hasta allí, de qué obstáculos aparecerán en el camino. Y, generalmente, parece que esto al sociólogo le basta; agotado en el esfuerzo de saber qué pasa y hacia donde habría que dirigirse para salir del atolladero —en los casos en que consiente en llegar hasta este punto— considera que, una vez señalado el lugar en el horizonte, su tarea ha terminado y puede desentenderse de lo que queda por hacer, una tarea menor, la de realmente llevar la barca hasta él.

¿Pero qué le ocurre a quien está ejerciendo un cargo en la Administración, llámémosle político, para simplificar? Su tarea es bien diferente. No se encuentra en tierra oteando el horizonte, sino en medio de las olas, y su cometido es que la barca no naufrague y que a ser posible llegue a algún lugar no demasiado desagradable. ¿Qué lugar? Hasta cierto punto carece de importancia. Por supuesto que el político ha sido elegido bajo el compromiso de llevar a cabo determinadas acciones, de llevar la barca, por seguir con el símil, al lugar que sus electores creen correcto, porque así lo anunció en su campaña y porque para ello ha sido elegido. Pero la gran paradoja de la posición del político reside precisamente en este punto: se le eligió con un programa que tuvo un amplio respaldo, pero ello no eliminó a quienes se le oponían; antes al contrario, al ocupar su cargo se comprometió a gober-



nar para todos, o, por lo menos, a no agravar los disensos. Dicho de otro modo, a moverse dentro de la relación de fuerzas de modo tal que no se ponga en peligro la cohesión del conjunto, aunque, al mismo tiempo, deba tratar de satisfacer a quienes lo eligieron sobre la base de sus propuestas. Y eso casi nunca supone navegar por una mar en calma sino más bien moverse siempre en aguas turbulentas.

La condición de no generar o no agravar los conflictos es fundamental para quien ejerce un cargo público y suele predominar sobre la de cumplir su propio programa; ocurre, sin embargo, que ello no puede ser desvelado, porque entonces fallaría la motivación mínima para acudir a votar, para recibir soporte de la población, para generar un cierto entusiasmo. De aquí que el político ocupe realmente una posición contradictoria entre el discurso público y la acción posible, y se vea abocado casi siempre a provocar decepción: no cumplió lo prometido, o, si lo hizo, fue con tantas concesiones que su acción pareció descafeinada. Sólo en situaciones muy especiales, en las que cuenta con una amplia hegemonía y un fuerte consenso respecto de la acción necesaria, la propuesta y la acción posterior tienden a coincidir; pero en estos casos sucede casi siempre que ya se había producido previamente un estado de opinión compartido, y las soluciones a aplicar gozan de un acuerdo amplio. Suelen ser momentos excepcionales que no se dan a menudo en el día a día de un país.

En el día a día los intereses son contradictorios y las presiones de todo tipo, enormes, y más cuanto más se avanza en una sociedad democrática, en la que una gran mayoría de la población tiene conciencia de sus derechos y capacidad para expresar sus opiniones e intereses. Tratar entonces de aplicar soluciones radicales o contundentes es precisamente lo que no puede hacer el político. Bien al contrario, el exceso de principios y de fórmulas prefijadas es justamente un estorbo, añade dificultades. Para que la barca no zozobre hay que aligerarla de principios; a veces, ni siquiera se sabe dónde irá a parar, porque cada momento exige concentrar la atención para no ser arrastrado por los vientos que nos zarandean; y la pregunta de adónde nos dirigimos, fundamental para el intelectual, suele ser considerada un tanto retórica por quien ocupa un cargo político. Lo que el político puede raramente permitirse es desvelar la razón última de la acción, propia o ajena, es decir, precisamente aquello que el sociólogo considera básico. Una excesiva claridad en los textos, en las definiciones, una mención de los intereses reales que sustentan una propuesta hacen a veces imposible un acuerdo, que a menudo reposa precisamente sobre la equivocidad y la posibilidad de interpretaciones varias. Aún recuerdo mi perplejidad la primera vez que asistí a la construcción de un texto destinado al acuerdo en Naciones Unidas: todo lo contrario del método académico, en el cual se establece qué se quiere decir y se procede a tratar de decirlo lo más claramente posible. El modo de proceder utilizado me pareció lo más cercano que conozco a la confusión; en un cierto momento, con ánimo de ayudar, paré el proceso e intenté ordenar las propuestas, darles coherencia y claridad, hasta que vi las miradas interrogantes de mis compañeros, preguntándose de donde había salido esta ingenua desubicada.

En este sentido, está claro que, lejos de establecer principios razonados, objetivos precisos, quien está en política no puede ser ni voluntariamente explícito ni excesivamente apegado a sus convicciones. Pedir sinceridad aparece casi como una obscenidad en la práctica de la política; como me comentaba hace poco con visible satisfacción personal una mujer que ejerce un cargo público de cierta relevancia, «he conseguido, durante todos estos años, no expresar nunca mi punto de vista sobre las cuestiones a debate». Para un intelectual esta posición es totalmente inadmisibile, la negación del sentido de su trabajo. Para quien está en política puede llegar a ser un mérito, y lo es más todavía cuando consigue hacer que su opinión coincida exactamente con el consenso al que se ha llegado en cada momento, porque esto indica que ha acabado con todas sus convicciones, listo para reconocer como necesidad cualquier acuerdo que permita seguir adelante minimizando las dificultades.

Todo ello lleva a menudo a que la acción política aparezca bajo la forma de un excesivo pragmatismo, de un activismo más o menos descerebrado y también, hay que reconocerlo, a veces decepcionante. Pero no olvidemos que la razón política es muy distinta de la académica: se trata de seguir navegando, y ello exige, en algunos momentos, tratar de avanzar sin pararse a pensar ni empeñarse en una dirección que implique un posible naufragio; no forzosamente para conservar el puesto, sino porque el peor fracaso sería precisamente provocar el conflicto y no saber conducirlo. Enfrentar a sectores de la población, dividir, encrespar, es el máximo error de un político, porque atenta contra el mandato fundamental del mantenimiento de un razonable consenso, del pacto por asegurar una convivencia aceptable por encima de cualquier otro interés. Claro que, si además, la barca acaba cerca del lugar deseado, el éxito y la satisfacción son mucho mayores, porque se ha conseguido entonces cumplir también con el segundo mandato, el de no defraudar ni a los tuyos ni a tus propios objetivos. Y si en algo podemos distinguir al buen político es precisamente en la capacidad de utilizar los vientos adversos para acercarse al destino que se fijó.

Todo ello lo experimentan en carne propia quienes se dedican a la política; por ello miran con cierta ironía a los sabios que desde la playa fijan objetivos maravillosos, sin tener presentes ni al viento ni al mar; mientras estos, escépticos, mueven tristemente la cabeza pensando que se avanza justo en la dirección opuesta a la deseada y preguntándose porqué el timón ha sido confiado a alguien tan incapaz de hallar el camino correcto.

Hay todavía otro aspecto que debe ser considerado para entender el frecuente desencuentro entre sociólogos y políticos: además de los objetivos que se persiguen, los tiempos de la investigación y de la actuación son totalmente distintos. En política los tiempos son cortos: nadie puede pararse a pensar, se necesita actuar con rapidez, dar muestras de gran energía desde los primeros cien días. En sociología los diagnósticos son lentos, los remedios inciertos; no tenemos tipologías ampliamente aceptadas, ni recetas aplicables a cualquier situación. Cuando el político necesita soluciones las requiere ya, en un plazo generalmente mínimo. Y le im-

porta poco la metodología utilizada para hallarlas, está dispuesto a creer en el saber profesional acreditado, se trate de un arquitecto, un ingeniero o un sociólogo. Pero cuando se dirige a alguien de esta última profesión, raramente escucha opiniones certeras: no tenemos recetas, no queremos tenerlas, hay que iniciar un estudio, se necesita un año. Al cabo del cual, a menudo, no sólo siguen siendo inexistentes las soluciones, sino que los resultados obtenidos están llenos de interrogantes, y la seriedad metodológica sigue impidiendo poder afirmar esto o aquello. De modo que, tantas veces lo he comprobado, el resultado principal del trabajo sociológico es la explicación de la construcción de una metodología, que sólo acaba interesando a la propia profesión.

#### Y SIN EMBARGO, HAY QUE LOGRARLO

Sé que el cuadro que os he descrito puede inducir a un rápido «apaga y vámonos». Y sin embargo, estoy convencida de que la colaboración entre Sociología y Administración es hoy una condición absolutamente esencial para la mejora de la vida pública. No he contado todo esto por afán de crítica de éstos o aquéllos, sino porque, presente en los dos ámbitos en distintos momentos de mi vida, como os he dicho, he creído captar las razones de una incomprensión, de un desencuentro inscrito en la diferencia de funciones y puntos de vista. Creo que sólo partiendo de las razones de este desencuentro y tratando de comprender las exigencias de cada papel podemos establecer una colaboración que me parece necesaria y urgente, dadas las características de nuestra sociedad.

Para ello se necesita mayor comprensión de las diferencias de punto de vista y de las razones que rigen las formas de actuar de cada posición. Ni quienes se dedican a la sociología son vagos elucubrantes que habitan torres de marfil, ni quienes se dedican a la política son pragmáticos sin principios impulsados por un excesivo protagonismo. Ambas profesiones tienen sus exigencias, a las que hay que responder en primer lugar. Descartar la posibilidad de una colaboración por demasiado frustrante supone renunciar a unos recursos necesarios en ambos casos: necesarios para los sociólogos para profundizar en sus propias hipótesis, para mejorar sus diagnósticos y sus intentos de solución. Necesarios, sobre todo, a los políticos, cuya actuación con información escasa puede tener un coste excesivo para los administrados.

A mi modo de ver, la Sociología española debiera intentar una cierta sistematización, en este sentido. Dejar de tantear de continuo, de inventar cada vez, compilar qué sabemos y qué no sabemos, de qué fenómenos hay evidencias suficientes y en qué ámbitos estamos aún en pañales. Qué soluciones se han dado en otros lugares a determinados problemas o desequilibrios sociales, qué resultados se han obtenido, con qué consecuencias inesperadas. De modo que el conocimiento que tenemos de la sociedad sea cada vez más estable, más compartido, menos errático que en la actualidad y que podamos ofrecer a la Administración algo más que

la brillantez y sabiduría de tal o cual persona, para pasar a ofrecer servicios profesionales de una calidad media aceptable y contrastada por la propia profesión.

Sé que esta versión de las tareas profesionales de la Sociología no es compartida por muchos y muchas de mis colegas. Hay en la sociología toda una vertiente crítica que se entiende a sí misma en mayor medida como arma de liberación, de destrucción de lo caduco, de formulación de utopías, y estoy de acuerdo en que esta vertiente puede ser la más atractiva e incluso la más útil en determinadas condiciones sociales. Hoy por hoy, y hablando de nuestro país, creo que la construcción de la sociedad democrática no está aún totalmente acabada y que, en términos generales, la Administración ha sido un instrumento adecuado para llevarla a cabo, en la etapa que se inicia con la transición política. Así que, por lo menos provisionalmente, y hasta que no nos convenzamos de lo contrario, creo que lo más adecuado, para orientar a futuros sociólogos y sociólogas, es tratar de darles instrumentos para ser útiles y encontrar empleo y, en la medida de lo posible, ayudar a nuestra sociedad a avanzar minimizando los errores y los costes personales y colectivos, aunque ello carezca de tonos de epopeya.

Pero todo esto es ya otro tema. Vamos a dejarlo aquí, que bastante me arriesgué ya.